

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

INE/CG778/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020
DENUNCIANTE: ISABEL GUADALUPE BRECEDA GÓMEZ Y OTRAS PERSONAS
DENUNCIADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ISABEL GUADALUPE BRECEDA GÓMEZ Y OTRAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS POSIBLEMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, QUIEN SUPUESTAMENTE USÓ PARA TAL EFECTO, SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO, SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O

COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
Comisión	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

<i>Instituto o INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley de Partidos</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>MC o denunciado</i>	Partido Movimiento Ciudadano
<i>quejosos o denunciantes</i>	Isabel Guadalupe Breceda Gómez, Josefa Mendoza Castellano, María Eugenia Jiménez Hernández, Antonio Nájera Chalé, Paola Merino Sánchez, Idelfonsa Manzanero Estrella, Iveth Margarita Cabrera Aguilar, Darvelio Carmona Gallardo, Rebeca Rodríguez Guillermo, Enrique de Jesús Hernández Peña, Sonia Yvonne Gamarra Castro, Claudia Bustamante Marcial, José Manuel Bustamante Marcial y Carla Milipsa García Ariza.
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Unidad Técnica o UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del <i>INE</i>

R E S U L T A N D O

I. ACUERDO INE/CG33/2019¹. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual se determinó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

¹ Consultable en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/CG1ex201901-23-ap-14.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

En este sentido, en el punto de acuerdo TERCERO del citado acuerdo, se determinó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Asimismo, se precisó que los procedimientos sancionadores ordinarios cuya suspensión pudiera generar la caducidad de la potestad sancionadora por parte de esta autoridad, en términos de la jurisprudencia 9/2018, emitida por la Sala Superior, o sobre los cuales recayera una orden expresa de resolución por parte del mencionado órgano jurisdiccional, continuarían con la instrucción ordinaria.

II. INFORME SOBRE EL ACUERDO INE/CG33/2019. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó al Consejo General el Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (**INE/CG33/2019²**), mediante el cual, hizo del conocimiento que los siete partidos políticos, entre ellos MC, durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

III. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del INE emitió el Acuerdo **INE/JGE34/2020**, por el que **SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19**, en cuyo punto **Octavo** se determinó lo siguiente:

² Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”.

[Énfasis añadido]

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este *Consejo General* emitió el Acuerdo **INE/CG82/2020**, denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19**, en el que, entre otras medidas, se estableció la siguiente:

“Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.”³

Finalmente, con el propósito de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el Acuerdo **INE/JGE45/2020**, de rubro **ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS**, mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de

³ En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

los diversos órganos del *INE*, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.

Cabe mencionar, que las anteriores determinaciones no resultan ser un obstáculo legal para que, en el presente caso, durante este periodo de contingencia la Comisión pueda válidamente sesionar y, en su caso, aprobar el presente proyecto para su posterior conocimiento y resolución, en cuanto existan las condiciones para hacerlo, por parte del *Consejo General*.

Esto es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafos 1 y 2 de la *LGIPE*, la *Comisión*, así como las otras tantas comisiones que integran a este Instituto, se erigen como instancias internas de apoyo que contribuyen al desempeño de las atribuciones del propio *Consejo General* y, en ese sentido, la determinación que asuma ese ente, respecto a la aprobación o no del proyecto que le es sometido a consideración por parte de la *UTCE*, no transgrede ni vulnera ningún derecho o garantía procesal de las partes involucradas.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 469 de la *LGIPE*, **concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la *UTCE* pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.**

De lo anterior, se sigue que la remisión del anteproyecto de resolución por parte de la *UTCE* a la *Comisión* se lleva a cabo como un acto intraprocesal más una vez concluida la investigación, para que las personas integrantes de la *Comisión* determinen si la investigación está suficientemente realizada o si es necesario continuar con la misma, de donde pasará como proyecto a *Consejo* en donde se resolverá por la votación de sus integrantes dando fin al procedimiento. Es decir, la etapa de remisión de la propuesta de resolución a los integrantes de la *Comisión* se da una vez cerrada la instrucción del procedimiento, de modo que, hasta el momento en que se resuelva por el *Consejo General*, ya no existen fases procesales pendientes que deban hacerse del conocimiento a darle intervención a las partes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Con ello, se concluye que la suspensión a que se refieren los acuerdos citados en el presente resultando, no impactan ni merman las labores que pueda realizar la *Comisión* aún en este periodo de suspensión, toda vez que su labor en este periodo, se lleva a cabo con el propósito de avanzar con los trabajos de revisión de los proyectos propuestos por la UTCE, para su posterior aprobación por parte del *Consejo General*, quien es la única instancia que tiene la potestad de resolver los procedimientos ordinarios sancionadores como el que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en párrafo 5, del multicitado artículo 469 de la *LGPE*.

IV. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. El diecinueve de junio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ordinarios.

V. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES. El veintidós de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados designó por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán.

VI. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobado el Acuerdo **INE/CG172/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL** en el que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la Comisión de Quejas.

VII. REACTIVACIÓN DE PLAZOS. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso **INE/CG238/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN,**

RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:

Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este Acuerdo.

En este sentido, mediante acuerdo uno de septiembre de dos mil veinte,⁴ la Unidad Técnica reactivó los plazos en el presente procedimiento.

VIII. DENUNCIAS. Mediante sendos oficios⁵, diversos órganos subdelegacionales de este Instituto hicieron del conocimiento a la UTCE las quejas que dieron lugar al presente procedimiento, las cuales fueron presentadas por diversas personas en contra de MC, ya que presuntamente fueron indebidamente afiliadas a dicho partido político, haciendo para tal efecto el uso no autorizado de sus datos personales.

IX. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y BAJA DE LAS PERSONAS QUEJOSAS DEL PADRON DE MILITANTES DE MC. Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte⁶ la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar las quejas mencionadas bajo el número de expediente citado al rubro; admitirlas a trámite y reservar su emplazamiento hasta contar con mayores elementos para determinar la existencia de las infracciones denunciadas y la probabilidad de que MC las haya cometido. Asimismo, se requirió al Partido Movimiento Ciudadano y a la *DEPPP*, a efecto de que señalaran si las personas quejasas fueron afiliadas al denunciado, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del citado partido político, las cédulas de afiliación correspondientes. Del mismo modo, se ordenó la baja de las personas inconformes del padrón de militantes respectivo.

⁴ Visible a fojas 189 a 194 del expediente.

⁵ Visible a fojas 1 a 94 del expediente

⁶ Visible a fojas 95 a 104 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

X. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A MC. Mediante oficio MC-INE-218/2020, de primero de diciembre de dos mil veinte,⁷ el denunciado dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que las personas quejasas si fueron sus afiliados, sin embargo, actualmente se encuentran dadas de baja de su padrón de militantes.

Del mismo modo, mediante oficios MC-INE-238/2020 de catorce de diciembre de dos mil veinte⁸ y MC-INE-405/2021 de veintiuno de julio del año próximo pasado⁹, aportó las cédulas de afiliación de las personas quejasas para demostrar que fueron incorporados a su padrón de militantes de manera libre y voluntaria.

XI. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA DEPPP. Mediante correo electrónico institucional de tres de diciembre de dos mil veinte,¹⁰ el Titular de la *DEPPP*, informó que las personas quejasas si fueron afiliadas al partido político denunciado en distintas fechas; sin embargo, fueron dadas de baja el veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

XII. EMPLAZAMIENTO, VISTA E INSPECCIÓN AL SITIO WEB DE MC. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno¹¹, la Unidad Técnica emplazó a MC, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndosele traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

⁷ Visible a fojas 137 a 154 del expediente.

⁸ Visible a fojas 200 a 214 del expediente.

⁹ Visible a fojas 276 a 278 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 161 a 163 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 279 a 221 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
Citatorio. 11/10/2021 ¹² Cédula. 12/10/2021 ¹³	Oficio MC-INE-566/2021 ¹⁴ de 13 de octubre de 2021.	<p>Que actúo de buena fe al confiar en los datos proporcionados por las personas quejasas y en la firma que estamparon en las cédulas de afiliación aportadas al sumario.</p> <p>Que las cédulas de afiliación que obran en los autos constituye prueba plena que demuestra la libre voluntad de las personas quejasas para integrarse a la militancia partidista de MC.</p> <p>Que las afiliaciones cuestionadas no son indebidas sino lícitas porque fueron consentidas, motivo por el cual debe declararse infundado el presente procedimiento.</p> <p>Asimismo, ofreció como pruebas la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones.</p>

Asimismo se dio vista a las personas quejasas, **con copia simple del original de las cédulas de afiliación** y, en el caso de Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro, con la impresión de los formatos de Cédulas del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político, aportados por MC, mediante las cuales el denunciado, pretende justificar la licitud de las afiliaciones cuestionadas, tal como se advierte en el cuadro siguiente:

¹² Visible a fojas 315 a 316 del expediente.

¹³ Visible a foja 317 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 331 a 336 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Isabel Guadalupe Breceda Gómez	08/10/2021 ¹⁵ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 11 al 15 de octubre de 2021 ¹⁶	No ¹⁷
Josefa Mendoza Castellano	12/10/2021 ¹⁸ No se localizó al quejoso debido a que el domicilio está mal referenciado y los vecinos desconocen su identidad. Se notificó por estrados	Del 13 al 19 de octubre de 2021 ¹⁹	No ²⁰
María Eugenia Jiménez Hernández	12/10/2021 ²¹ Se entendió con la quejosa	Del 13 al 19 de octubre de 2021 ²²	No ²³
Antonio Nájera Chalé	11/10/2021 ²⁴ Se entendió con el quejoso	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ²⁵	No ²⁶
Paola Merino Sánchez	11/10/2021 ²⁷ Se entendió con la quejosa	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ²⁸	No

¹⁵ Visible a fojas 309 a 311 del expediente

¹⁶ Sin contar sábado 09 y domingo 10 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

¹⁷ Visible a foja 445 del expediente

¹⁸ Visible a fojas 411 a 418 del expediente

¹⁹ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

²⁰ Visible a foja 428 del expediente

²¹ Visible a foja 466 del expediente

²² Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

²³ Visible a foja 450 del expediente

²⁴ Visible a foja 328 del expediente

²⁵ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

²⁶ Visible a foja 440 del expediente

²⁷ Visible a fojas 372 a 373 del expediente

²⁸ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Idelfonsa Manzanero Estrella	08/10/2021 ²⁹ Se entendió con la quejosa	Del 11 al 15 de octubre de 2021 ³⁰	No ³¹
Iveth Margarita Cabrera Aguilar	08/10/2021 ³² Se entendió con la quejosa	Del 11 al 15 de octubre de 2021 ³³	SI ³⁴ Respecto a la cédula de afiliación que presenta el Partido Movimiento Ciudadano, misma en donde aparece mi nombre y mis datos de domicilio en la cual se encuentra estampada una forma, que desconozco por no pertenecer a la que la suscita estampa en todos sus documentos oficiales y por tanto denuncié a quien haya puesto esa firma en donde aparece mi nombre, solicitando que de inmediato se me de baja del padrón de militantes de dicho partido político.
Darvelio Carmona Gallardo	12/10/2021 ³⁵ Se entendió con el quejoso	Del 13 al 19 de octubre de 2021 ³⁶	No

²⁹ Visible a foja 338 del expediente

³⁰ Sin contar sábado 09 y domingo 10 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

³¹ Visible a foja 433 del expediente

³² Visible a foja 461 del expediente

³³ Sin contar sábado 09 y domingo 10 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

³⁴ Visible a foja 463 del expediente

³⁵ Visible a fojas 423 a 424 del expediente

³⁶ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Rebeca Rodríguez Guillermo	11/10/2021 ³⁷ Se entendió con la quejosa	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ³⁸	No ³⁹
Enrique de Jesús Hernández Peña	11/10/2021 ⁴⁰ No se localizó al quejoso debido a que el domicilio esta mal referenciado y los vecinos desconocen su identidad. Se notificó por Estrados	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ⁴¹	No ⁴²
Sonia Yvonne Gamarra Castro	11/10/2021 ⁴³ Se entendió con la quejosa	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ⁴⁴	No ⁴⁵
Claudia Bustamante Marcial	12/10/2021 ⁴⁶ Se entendió con la quejosa	Del 13 al 19 de octubre de 2021 ⁴⁷	No ⁴⁸
José Manuel Bustamante Marcial	13/10/2021 ⁴⁹ Se entendió con familiar del quejoso Se notificó por estrados	Del 14 al 20 de octubre de 2021 ⁵⁰	No ⁵¹

³⁷ Visible a foja 350 del expediente

³⁸ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

³⁹ Visible a foja 435 del expediente

⁴⁰ Visible a fojas 355 a 356 del expediente

⁴¹ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

⁴² Visible a foja 435 del expediente

⁴³ Visible a foja 323 del expediente

⁴⁴ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

⁴⁵ Visible a foja 440 del expediente

⁴⁶ Visible a fojas 376 a 377 del expediente

⁴⁷ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

⁴⁸ Visible a foja 451 del expediente

⁴⁹ Visible a fojas 382 a 409 del expediente

⁵⁰ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

⁵¹ Visible a foja 451 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para desahogar la vista	Escrito de objeciones
Carla Milipsa García Ariza	11/10/2021 ⁵² Se entendió con la quejosa	Del 12 al 18 de octubre de 2021 ⁵³	No

Del mismo modo, con el propósito de constatar que las personas quejosas ya no se encontraban afiliadas al denunciado, se ordenó inspeccionar el sitio web de MC, lo cual se hizo constar mediante el acta circunstanciada⁵⁴ respectiva.

XIII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós⁵⁵ se tuvo a MC contestando el emplazamiento formulado en su contra y por desahogada la vista presentada por Iveth Margarita Cabrera Aguilar. Asimismo se decretó la preclusión del derecho de las personas quejosas restantes a objetar o formular manifestaciones respecto de las cédulas de afiliación cuestionadas.

Por último se requirió a la DERFE, los expedientes electrónicos que acreditan la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político nacional correspondientes a Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro.

XIV. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Mediante correo electrónico de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós⁵⁶, desde la cuenta institucional alfredo.cid@ine.mx, correspondiente al Secretario Técnico normativo de la DERFE, se remitieron a la UTCE, los expedientes electrónicos que acreditan la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político nacional correspondientes a Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro.

⁵² Visible a fojas 344 a 345 del expediente

⁵³ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de octubre de 2021, por ser inhábiles.

⁵⁴ Visible a fojas 292 a 298 del expediente

⁵⁵ Visible a fojas 471 a 477 del expediente.

⁵⁶ Visible a fojas 488 a 495 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

XV. ACUERDO DE ALEGATOS Y VISTA. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós⁵⁷ para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Adicionalmente se dio vista a Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro con una impresión de los expedientes electrónicos que acreditan la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a MC.

Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Alegatos
MC	04/10/2022 ⁵⁸ Se entendió con personal de la representación y se notificó por estrados.	Del 05 al 11 de octubre de 2022 ⁵⁹	Oficio MC-INE-315/2022 de 5 de octubre de 2022. Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento.
Isabel Guadalupe Breceda Gómez	06/10/2022 ⁶⁰ Se entendió con persona autorizada por la quejosa	Del 7 al 13 de octubre de 2022 ⁶¹	No
Josefa Mendoza Castellano	04/10/2022 ⁶² Se entendió con la quejosa	Del 05 al 11 de octubre de 2022 ⁶³	No formuló alegatos ni desahogo la vista respecto a la cedula electrónica respectiva.
María Eugenia Jiménez Hernández	05/10/2022 ⁶⁴	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁶⁵	No

⁵⁷ Visible a fojas 496 a 501 del expediente

⁵⁸ Visible a fojas 266 a 271 del expediente

⁵⁹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁶⁰ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁶¹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁶² Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁶³ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁶⁴ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁶⁵ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Alegatos
	Se entendió con la quejosa		
Antonio Nájera Chalé	05/10/2022 ⁶⁶ Ninguna persona atendió la diligencia. Se notificó por estrados	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁶⁷	No
Paola Merino Sánchez	05/10/2022 ⁶⁸ Se entendió con la quejosa	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁶⁹	No
Idelfonsa Manzanero Estrella	05/10/2022 ⁷⁰ Se entendió con la quejosa	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁷¹	No formuló alegatos ni desahogo la vista respecto a la cedula electrónica respectiva.
Iveth Margarita Cabrera Aguilar	04/10/2022 ⁷² No se localizó a la quejosa en el domicilio. Los vecinos del lugar refirieron que cambio de domicilio. Se notificó por estrados	Del 05 al 11 de octubre de 2022 ⁷³	No
Darvelio Carmona Gallardo	05/10/2022 ⁷⁴ Se entendió con el quejoso	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁷⁵	No
Rebeca Rodríguez Guillermo	06/10/2022 ⁷⁶ Se entendió con la quejosa	Del 7 al 13 de octubre de 2022 ⁷⁷	No

⁶⁶ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁶⁷ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁶⁸ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁶⁹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁷⁰ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁷¹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁷² Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁷³ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁷⁴ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁷⁵ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁷⁶ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁷⁷ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Persona notificada	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Alegatos
Enrique de Jesús Hernández Peña	07/10/2022 ⁷⁸ Se entendió con persona autorizada por el quejoso	Del 10 al 14 de octubre de 2022 ⁷⁹	No
Sonia Yvonne Gamarra Castro	04/10/2022 ⁸⁰ Se entendió con la quejosa	Del 05 al 11 de octubre de 2022 ⁸¹	No
Claudia Bustamante Marcial	12/10/2022 ⁸² Se entendió con la quejosa	Del 13 al 19 de octubre de 2022 ⁸³	No
José Manuel Bustamante Marcial	13/10/2022 ⁸⁴ Se entendió con familiar del quejoso Se notificó por estrados	Del 14 al 20 de octubre de 2022 ⁸⁵	No
Carla Milipsa García Ariza	05/10/2022 ⁸⁶ Se entendió con la quejosa	Del 06 al 12 de octubre de 2022 ⁸⁷	No

XVI. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la *Unidad Técnica* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las personas quejasas fueron dadas de baja del padrón de militantes del MC, sin que hubiesen sido reincorporadas al mismo.

XVII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión*.

⁷⁸ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁷⁹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁸⁰ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁸¹ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁸² Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁸³ Sin contar sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁸⁴ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁸⁵ Sin contar sábado 15 y domingo 16 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

⁸⁶ Visible a fojas 280 a 283 del expediente

⁸⁷ Sin contar sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

XVIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En su Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la *Comisión* analizó y aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes presentes ordenando turnarlo a este Consejo General para su aprobación definitiva, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*, los cuales se encuentran replicados en los numerales 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y y), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación de las personas quejasas, utilizando para ello indebidamente sus datos personales, por parte de MC.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de las infracciones denunciadas, atribuidas a MC, consistentes, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y la utilización indebida de datos personales de las personas quejas, para tal efecto.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366 del COFIPE—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas a MC, se cometieron en diversas fechas, en las cuales tuvieron vigencia diversos ordenamientos jurídicos, sin perder de vista que todos ellos contienen exactamente las mismas reglas respecto al derecho a la libertad de afiliación a los partidos políticos, como se desarrollará con amplitud más adelante en este mismo instrumento resolutivo.

En efecto, conforme a lo anotado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, la Unidad Técnica realizó diversas diligencias a fin de esclarecer la fecha de afiliación de las personas quejasas a MC obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación DEPPP	Fecha de afiliación MC ⁸⁸
1	Isabel Guadalupe Breceda Gómez	12/07/2017	12/07/2017
2	Josefa Mendoza Castellano	29/02/2020	29/02/2020
3	María Eugenia Jiménez Hernández	15/06/2014	15/06/2014
4	Antonio Nájera Chalé	08/04/2013	08/05/2013
5	Paola Merino Sánchez	13/11/2019	13/11/2019
6	Idelfonsa Manzanero Estrella	28/11/2019	28/11/2019
7	Iveth Margarita Cabrera Aguilar	12/03/2012	03/03/2012
8	Darvelio Carmona Gallardo	16/04/2012	04/04/2012
9	Rebeca Rodríguez Guillermo	29/03/2014	29/03/2014
10	Enrique de Jesús Hernández Peña	22/02/2020	22/02/2020

⁸⁸ Visible a fojas 149 a 152 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i>	Fecha de afiliación <i>MC</i> ⁸⁸
11	Sonia Yvonne Gamarra Castro	23/11/2019	23/11/2019
12	Claudia Bustamante Marcial	20/11/2019	20/11/2019
13	José Manuel Bustamante Marcial	20/11/2019	20/11/2019
14	Carla Milipsa García Ariza	16/04/2012	10/04/2012

De los expuesto se advierte que las afiliaciones de Antonio Nájera Chalé, Iveth Margarita Cabrera Aguilar, Darvelio Carmona Gallardo, Rebeca Rodríguez Guillermo y Carla Milipsa García Ariza, fueron realizadas **antes de la entrada en vigor de la LGIPE**; por tanto, la conducta atribuida al partido político denunciado debe ser analizada bajo la luz de las normas jurídicas vigentes al momento en que sucedieron los hechos presuntamente infractores; esto es, la legislación comicial sustantiva aplicable, será el *COFIPE*, en razón de que los hechos que se investigan se suscitaron bajo el imperio de dicha norma.

Del mismo, modo, respecto de las afiliaciones de las personas quejosas restantes, toda vez que fueron afiliadas con posterioridad al veintitrés de mayo de dos mil catorce, sus afiliaciones serán analizadas a la luz de la *LGIPE*.

En cuanto a las reglas procedimentales aplicables al presente procedimiento, serán las contenidas en la *LGIPE*, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la *LGIPE*, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**⁸⁹.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve,

⁸⁹ Véase <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.
- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de las personas a los partidos políticos, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido Acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en su archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no

lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.

4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

Como se ha señalado con antelación, las personas quejas alegaron la violación a su derecho de afiliación libre y voluntaria para tomar parte en los asuntos públicos de país, así como el uso no autorizado de sus datos personales, en esencia, porque supuestamente fueron inscritos sin su consentimiento al padrón de militantes de MC.

1. Excepciones y defensas

Por su parte, *MC*, en sus distintas intervenciones procesales, medularmente, señaló en su defensa lo siguiente:

- Que actuó de buena fe al confiar en los datos proporcionados por las personas quejas y en la firma que estamparon en las cédulas de afiliación aportadas al sumario.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

- Que las cédulas de afiliación que obran en los autos constituyen prueba plena que demuestra la libre voluntad de las personas quejasas para integrarse a la militancia partidista de MC.
- Que las afiliaciones cuestionadas no son indebidas sino lícitas, porque fueron consentidas, motivo por el cual debe declararse infundado el presente procedimiento.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como en la rendición de alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia por lo que serán analizados al realizar el estudio del caso concreto.

2. Materia del procedimiento

Con base en las posturas expresadas por las partes, la materia del procedimiento en el presente asunto estriba en determinar si MC conculcó el derecho a la libre afiliación en materia política que corresponde a las personas quejasas, quienes alegaron no haber consentido estar en sus filas, vulnerando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354 párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a); 456, párrafo 1, inciso a); de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y y), de la Ley de Partidos.

3. Marco normativo

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6°

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

*II. La información que se refiere a la vida privada y **los datos personales será protegida** en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

Artículo 16.

...

*Toda persona tiene derecho **a la protección de sus datos personales**, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

*III. Asociarse individual y **libremente** para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

...

*Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse **libre** e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.*

En esta medida, se considera que el derecho de asociación en materia político-electoral, como lo ha sostenido la *Sala Superior*, es un **derecho fundamental** consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, el cual propicia el pluralismo político, así como la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático, en el entendido de que sin su existencia, o de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, se puede concluir que el derecho de asociación en materia político-electoral, es la base de la formación de los partidos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y VI; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Ahora bien, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 de la *Constitución*, está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea, por un lado, pacífico; y por otro, que tenga un objeto lícito, mientras que la última, circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**⁹⁰.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente⁹¹, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

En el ámbito internacional, el derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos

⁹⁰ Consultable en la página:
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁹¹ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes (de asociarse) para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

En el espacio nacional, no obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y ocho años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

*a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que **suscriben el documento como manifestación formal de afiliación**, y*

*b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y **firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.**”*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación**.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó de manera expresa lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la **afiliación** individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, **cumplir sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con sus obligaciones**, señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hizo más tarde el *COFIPE* de quince de

enero de dos mil ocho y actualmente la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del otrora Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprobaron los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)*.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación, la *DEPPP* deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los mencionados Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional contaban o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los afiliados necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él,

determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de Movimiento Ciudadano⁹²

A efecto de tener claridad acerca del procedimiento que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del *denunciado*, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de la misma:

CAPÍTULO PRIMERO **DEL MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ADHESIÓN**

ARTÍCULO 3

De la Afiliación y la Adhesión

1. *Todo ciudadano/a inscrito en el Registro Federal de Electores puede solicitar ya sea su afiliación como militante del Movimiento Ciudadano, o su adhesión al mismo como simpatizante.*
...
2. ***La afiliación y la adhesión son individuales, libres, pacíficas y voluntarias*** y se deben solicitar en la instancia del Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del interesado.
...
4. *Para afiliarse al Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes compromisos:*

⁹² Consultable en: <https://movimientociudadano.mx/estatutos>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

- a) **Aceptar y cumplir** la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del Movimiento Ciudadano.
- b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte el Movimiento Ciudadano.
- c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos del Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le asignen.
- d) Contar con la credencial para votar expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.
- e) **Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.**

4. La credencial de militante del partido expedida por la Comisión Operativa Nacional testimonia la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de los militantes del Movimiento Ciudadano.

ARTÍCULO 8

De los Derechos de las Afiliadas y de los Afiliados

Todo Afiliado o Afiliada tiene derecho a:

...

11. **Renunciar** al Movimiento Ciudadano, manifestando los motivos de su separación.

[Énfasis añadido]

D) Normativa emitida por este Consejo General

➤ **Acuerdo INE/CG33/2019**

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave **INE/CG33/2019**, por el cual se aprobó “la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales” ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN⁹³, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos

⁹³ Partidos Políticos Nacionales.

se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

ACUERDO

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

CUARTO. *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

QUINTO. *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

[Énfasis añadido]

➤ **Acuerdo INE/CG231/2019**

Justificación del Acuerdo

9. Aplicación móvil para la captación de datos para las afiliaciones, ratificaciones o refrendos de la militancia de los PPN

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Partiendo del marco jurídico expuesto, en el presente Acuerdo se establecen las bases para la operación de la aplicación móvil que el INE pone a disposición de los PPN que opte por su utilización, a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve, para la implementación del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los PPN, aprobado a través del Acuerdo INE/CG33/2019.

En el considerando 13 del citado Acuerdo se estableció que, para demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los ratificaciones o refrendos debían incluir, como mínimo, los elementos siguientes:

- I. Nombre completo;
- II. Clave de elector;
- III. Fecha de afiliación;
- IV. Domicilio completo; y,
- V. La manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, a través de la firma manuscrita digitalizada.

Asimismo, se dijo que tales elementos podrían recabarse a través de la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los PPN y que, además, los PPN debían incluir en la manifestación formal de afiliación, ratificación o refrendo, los requisitos que su normativa interna estableciera.

A fin de recabar los elementos mínimos citados, la aplicación móvil generará un expediente electrónico, el cual contendrá las imágenes siguientes:

- a) Anverso de la Credencial para Votar original;**
- b) Reverso de la Credencial para Votar original;**
- c) Fotografía viva de la o el ciudadano; y**
- d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.**

En el entendido que los datos relativos al nombre completo, clave de elector y domicilio de la o el ciudadano que manifiesta su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, serán extraídos del padrón electoral, a partir de la captura del anverso y el reverso del original de la Credencial para Votar que emite este Instituto a la ciudadanía, mientras que la fotografía viva y la manifestación de voluntad de afiliación, ratificación o refrendo con firma

manuscrita digitalizada, será obtenidas directamente por la o el auxiliar, al momento de solicitar a la persona interesada la afiliación, ratificación o refrendo de su militancia.

Cabe señalar que la fotografía viva de la persona es un mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su Credencial para Votar emitida por el INE con la finalidad de afiliarla a un PPN sin su consentimiento o conocimiento. Es decir, al contar con la fotografía viva de la persona, **el INE cuenta con elementos que le permiten tener certeza de que la persona que está presentando el original de su Credencial para Votar expedida por este Instituto a la o el auxiliar del PPN, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está manifestando a través de su firma manuscrita digitalizada, su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar de manera libre e individual su militancia.**

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

5. Conclusiones

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- Por disposición constitucional y legal, sólo los ciudadanos mexicanos tienen el derecho político electoral de formar partidos políticos y **afiliarse libre e individualmente** a ellos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

- Afiliado o Militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales **se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.**
- Los partidos políticos **deben** resguardar con el debido cuidado, la documentación en la que conste que cada uno de sus afiliados, concedió su consentimiento para ser incorporado a su padrón de afiliados.
- Podrán afiliarse a MC los ciudadanos y ciudadanas mexicanos **que acudan** a los órganos partidarios competentes para realizar la afiliación.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.
- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los

datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

- En el Acuerdo INE/CG231/2019, se implementó como mecanismos alterno de afiliación, la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los Partidos Políticos Nacionales, conformando un expediente electrónico que tendría como elementos mínimos: a) Anverso de la Credencial para Votar original; b) Reverso de la Credencial para Votar original; c) Fotografía viva de la o el ciudadano; y d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

6. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante de MC, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, **por regla general, los partidos políticos — MC, en el caso en particular— tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que las y los ciudadanos en cuestión acudieron a solicitar su afiliación y que las mismas fueron libres y voluntarias**, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, cualquiera que haya sido su objeto, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran expresaron una decisión individual y libre.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente **SUP-RAP-107/2017**⁹⁴, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁹⁵ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁹⁶ y como estándar probatorio,⁹⁷ como se ilustra en los párrafos subsecuentes.

En el primer aspecto —*regla probatoria*— implica destacadamente **quién debe aportar los medios de prueba** en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

⁹⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁹⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁹⁶ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁹⁷ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el segundo matiz —*estándar probatorio*— es un criterio para concluir **cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho**, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁹⁸, ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia **cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de algún ciudadano versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado su consentimiento, se deben satisfacer dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

⁹⁸ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “*el que afirma está obligado a probar*” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, conforme al artículo 441 de la *LG/PE*, resulta aplicable supletoriamente el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral*, lo que implica, que la denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliada al partido denunciado.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las denuncias que dieron lugar al presente procedimiento sancionador, Los quejosos alegan que **no dieron su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones** y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado **alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, **la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar** las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación, a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Ahora bien, otro aspecto importante para tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación, en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las personas quejosas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad

de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En el mismo sentido, es importante no perder de vista que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes **podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.***
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes **podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.***
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que **es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, para destruir la eficacia probatoria de los elementos de prueba aportados por su contraparte, quejoso y denunciado **deberán señalar con precisión los aspectos**

de la prueba que, a su parecer, constituyen defectos o deficiencias que le restan credibilidad; además, no basta con formular dicha objeción formal, para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario aportar, en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar los extremos de su objeción.

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005⁹⁹ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).

En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de

⁹⁹ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio o que adolece de ciertas deficiencias, sino que **es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción**, es decir, que al objetante corresponde la carga de probar su objeción.

Robustecen lo anterior, los criterios emitidos por diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.*¹⁰⁰**
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.*¹⁰¹**
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.*¹⁰²**
- ***DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*¹⁰³**

¹⁰⁰ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

¹⁰¹ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

¹⁰² Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

¹⁰³ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹⁰⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹⁰⁵

De igual forma, destaca la Jurisprudencia I.3o.C. J/11¹⁰⁶, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las***

¹⁰⁴ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

¹⁰⁵ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

¹⁰⁶ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.

Énfasis añadido

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29¹⁰⁷, sostuvo el siguiente criterio:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

Énfasis añadido

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado **cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso**, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, **no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.**

¹⁰⁷ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

Lo anterior, porque conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

7. Pruebas y acreditación de los hechos

A) Pruebas recabadas por la UTCE

1. **Correo electrónico** remitido desde la cuenta patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de Partidos Políticos y Financiamiento de la *DEPPP*, enviado a la Unidad Técnica el tres de diciembre de dos mil veinte, a través del cual informó el estatus de las personas quejas como afiliadas a MC, la fecha en que fueron integrados al padrón de militantes y aquella en que fueron dados de baja.
2. **Acta circunstanciada de inspección** a la página electrónica del *MC*, practicada el veintinueve de septiembre del año próximo pasado, mediante la cual se constató que actualmente las personas quejas no se encuentran inscritos como militantes del denunciado, en sus plataformas públicas.
3. Correo electrónico remitido desde la cuenta alfredo.cid@ine.mx, correspondiente al Secretario Técnico Normativo de la *DERFE*, enviado a la Unidad Técnica el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual remitió a este Instituto, la *Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro*.

B) Pruebas aportadas por el Partido Movimiento Ciudadano

4. **Documental privada**, consistentes en el oficio MC-INE-208/2020 , de primero de diciembre de dos mil veinte, a través del cual reconoció haber afiliado a las personas quejas y señaló haberlas dado de baja de su padrón de militantes, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG33/2019 y a lo ordenado por la autoridad electoral sustanciadora.

5. **Documental privada**, consistente en **el original de once cédulas de afiliación** correspondientes a Isabel Guadalupe Breceda Gómez, María Eugenia Jiménez Hernández, Antonio Nájera Chalé, Paola Merino Sánchez, Iveth Margarita Cabrera Aguilar, Darvelio Carmona Gallardo, Rebeca Rodríguez Guillermo, Enrique de Jesús Hernández Peña, Claudia Bustamante Marcial, José Manuel Bustamante Marcial y Carla Milipsa García Ariza mediante las cuales pretende demostrar la licitud de las afiliaciones cuestionadas.

6. **Documental privada** consistente en la impresión de la ***Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro***, con las que pretende acreditar que la militancia de las denunciantes fue voluntaria.

C) Valoración de los medios de prueba

De los medios de prueba referidos con anterioridad, los listados en los numerales 1, 2 y 3, son pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Por otro lado, las pruebas identificadas con los numerales 4, 5 y 6, en tanto documentales privadas, únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a

los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

En este sentido, del análisis al contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

D) Conclusiones

1. Las personas quejasas **fueron integradas al padrón de militantes del MC**, en las fechas referidas por la DEPPP y confirmadas por el propio denunciado, de manera que la base fáctica del procedimiento que nos ocupa quedó demostrada.
2. Las personas quejasas fueron **dadas de baja como militantes del denunciado**, el veinte de octubre y veintiséis de noviembre de dos mil veinte y cancelados.
3. Con excepción de la correspondiente al C. Antonio Nájera Chalé, las cédulas de afiliación aportadas por *MC* resultan idóneas para demostrar que las personas quejasas fueron incorporadas voluntaria y libremente, al padrón de militantes del justiciable, máxime que, con excepción de Iveth Margarita Cabrera Aguilar, las mismas no fueron objetadas en términos del artículo 24 del *Reglamento de Quejas*, tal como se verán en lo subsecuente.
4. Por cuanto hace al ciudadano mencionado en el numeral anterior, la cédula de afiliación aportada por *MC* no es idónea para demostrar la licitud de la afiliación cuestionada, puesto que, acorde con su contenido, el consentimiento del quejoso se otorgó el **ocho de mayo de dos mil trece**; sin embargo, acorde a lo señalado por la *DEPPP* y el propio partido político, este dio de alta al inconforme como su militante, desde el **ocho de abril de dos**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

mil trece, es decir, cuando todavía no contaba con el consentimiento correspondiente;

5. Aun cuando Iveth Margarita Cabrera Aguilar señaló que la cédula de afiliación aportada por el MC, contiene una firma que no pertenece a su persona, no allegó a la controversia, medio de convicción alguno para desvirtuar la autenticidad o eficacia del documento referido.
6. Los medios de prueba aportados por MC resultaron idóneos, pertinentes y suficientes para justificar sus excepciones, se reitera, salvo en lo que se refiere al C. Antonio Nájera Chalé.
7. MC demostró haber realizado las acciones concretas ordenadas por tanto por la UTCE como por el Consejo General, a través del acuerdo INE/CG33/2019, dando de baja de su Padrón de militantes a los quejosos, dentro del plazo correspondiente.

8. Caso concreto.

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejosas, es preciso subrayar que, de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas, un hecho antijurídico electoral.

Posteriormente, verificar que este hecho sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribubilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral, se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocida en la legislación de este país, la libertad de la ciudadanía de afiliarse, permanecer afiliada, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno; además del derecho que tiene la ciudadanía de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, identificados con el número de Resolución CG617/2012, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución al denunciado, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y sanción respectiva.

Para ello, esta autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obra en el expediente, a partir del cual es posible arribar al descubrimiento de la verdad de manera directa, en el caso del análisis de las pruebas plenas, o bien, de manera indirecta o circunstancial, al obtener indicios incriminatorios, entendidos estos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de otro conocido, como se razona enseguida.

➤ **Afiliaciones legales.**

En este sentido, debe decirse que, en casos como el que nos ocupa, relacionados con la presunta afiliación indebida de una persona a un partido político, corresponde al quejoso demostrar la existencia del hecho en que se basa su inconformidad, es decir, la existencia de la afiliación tachada de ilegal, así como el señalamiento del denunciado, es decir, el partido político que supuestamente realizó la conducta infractora.

Al respecto, conviene destacar que, si el denunciado afirma que las personas quejasas consintieron ser incorporadas al padrón de militantes respectivo, es decir, que la afiliación objetada fue voluntaria y libre, entonces **deberá demostrar, con los elementos correspondientes, que los denunciantes efectivamente sí expresaron su voluntad para ser registrados como militantes del instituto político en cuestión.**

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "*el que afirma está obligado a probar*", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así las cosas, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que, en el caso, la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, pues afirmó que la afiliación de las personas quejasas a su padrón de militantes fue voluntaria y libre, y no, a las personas inconformes acreditar que no solicitaron su inclusión en dicho padrón.

En efecto, como se razonó en el apartado anterior, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, la *DERFE* y el mismo denunciado, que las personas denunciantes **si se encontraban incluidos en el padrón de militantes del MC**, esto es, los hechos consistentes en la afiliación de Isabel Guadalupe Breceda Gómez, Josefa Mendoza Castellano, María Eugenia Jiménez Hernández, Paola Merino Sánchez, Idelfonsa Manzanero Estrella, Iveth Margarita Cabrera Aguilar, Darvelio Carmona Gallardo, Rebeca Rodríguez Guillermo, Enrique de Jesús Hernández Peña, Sonia Yvonne Gamarra Castro, Claudia Bustamante Marcial, José Manuel Bustamante Marcial y Carla Milipsa García Ariza.

Ahora bien, una vez demostrado el hecho debatido, corresponde verificar si la causa por la cual se alega su ilicitud se encuentra acreditada, es decir, si las personas quejasas consintieron o no ser incluidas en el padrón de militantes del partido político justiciable, para lo cual era menester autorizar el uso de sus datos personales.

Con todo lo anterior en mente, en el caso que nos ocupa, esta autoridad electoral nacional estima que **no se acreditó la infracción alegada por las personas quejasas cuyo caso se analiza**, puesto que el denunciado, para justificar las afirmaciones en que basó su defensa, **ofreció el original de las cédulas de afiliación** de dichas personas, así como las **Cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político a nombre de Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro**, sin que, a excepción de Margarita Iveth Cabrera

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Aguilera, las objetaran en modo alguno, mucho menos en términos del numeral 24 del *Reglamento de Quejas*, no obstante las oportunidades procesales para ello.

En efecto, como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, al dar contestación al emplazamiento, el MC afirmó que la militancia de las personas quejasas estuvo precedida de su voluntad libre, individual e informada, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales, basando sus afirmaciones en la cédulas de afiliación referidas.

Al respecto, cabe resaltar que mediante sendos proveídos de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Unidad Técnica dio vista a las personas quejasas con copia simple del original de las cédulas de afiliación respectivas, aportadas tanto por la DERFE como el propio denunciado, concediéndoles un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a dicho documento.

Así, no obstante que dichos proveídos fueron debidamente notificados a las personas inconformes, a excepción de Margarita Iveth Cabrera Aguilar, no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación alguna, ni aportar medios de prueba, encaminados a desvirtuar el valor y alcance probatorio de la cédula de afiliación respectiva.

En efecto, mediante escrito de once de octubre de dos mil veintiuno, Margarita Iveth Cabrera Aguilar compareció al procedimiento **y objetó el contenido firma de la cédula de afiliación** que la vincula políticamente a MC, manifestando, medularmente, lo siguiente:

...

Respecto a la cédula de afiliación que presenta el Partido Movimiento Ciudadano, misma en donde aparece mi nombre y mis datos de domicilio en la cual se encuentra estampada una firma, que desconozco por no pertenecer a la que la suscita estampa en todos sus documentos oficiales y por tanto denuncié a quien haya puesto esa firma en donde aparece mi nombre,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

solicitando que de inmediato se me de baja del padrón de militantes de dicho partido político...

Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto la quejosa desconoció la firma contenida en la cédula cuestionada, no expuso las razones por las cuales esta autoridad electoral debía compartir dicho criterio y restarle eficacia demostrativa a dicho medio de prueba, es más, la quejosa no controvertió frontalmente la autenticidad de la firma contenida en la cédula cuestionada ni aportó medio de prueba alguno para justificar sus afirmaciones, sino que, de manera vaga y ambigua, se limitó afirmar que la firma controvertida no correspondía a la que utiliza en sus documentos oficiales, incumpliendo con la carga que le asigna el artículo 24, párrafo 3, del *Reglamento*, en el sentido de no basta la simple objeción formal de una prueba para desvirtuarla, sino es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas**.

En efecto, si bien es cierto que inicialmente le correspondía a MC probar que Margarita Iveth Cabrera Aguilar consintió ser su afiliada, lo es también que una vez aportada la cédula respectiva, la carga probaría se revirtió hacia la quejosa, quien afirmó que la firma contenida en la cédula controvertida no pertenece a su persona y que fue estampada por persona distinta a ella, de manera que la objeción expresada es meramente formal, además de que adolece de sustento probatorio. Bajo estas circunstancias, este Consejo estima que la cédula de afiliación que nos ocupa resulta eficaz para demostrar la legal afiliación de la citada quejosa.

Ahora bien, es importante destacar que MC obtuvo el consentimiento de Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro, para incorporarlas a su padrón de militantes, a través de la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano-INE” del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, lo cual resulta válido y en ese sentido las citadas afiliaciones deben considerarse como lícitas, ya que gozan de presunción en su autenticidad; lo anterior, de conformidad con los *Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional*, aprobados mediante Acuerdo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

INE/CG231/2019, del Consejo General de este Instituto, en los cuales se define lo siguiente:

‘...’

p) Expediente electrónico: Conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva de la o el ciudadano y la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

...’

Asimismo, conforme a dichos Lineamientos, se estableció que el objetivo de la aplicación móvil, era dotar a los partidos políticos nacionales, **de una herramienta tecnológica que permitiera hacer más eficiente, práctico y sencillo el proceso de captación de datos para acreditar la voluntad de la ciudadanía** de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, así como la creación de un expediente electrónico, el cual les serviría para automatizar e integrar los expedientes de sus militantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el considerando 13 y Punto de acuerdo Séptimo del Acuerdo del Consejo General identificado como INE/CG33/2019.

Ahora bien, es importante destacar que en el considerando 9 del referido Acuerdo INE/CG33/2019, se estableció, en lo conducente, lo siguiente:

“...’

*En el considerando 13 del citado Acuerdo se estableció que, para demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía, las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN, así como los ratificaciones o refrendos debían incluir, **como mínimo**, los **elementos** siguientes:*

I. Nombre completo;

II. Clave de elector;

III. Fecha de afiliación;

IV. Domicilio completo; y,

V. La manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, a través de la firma manuscrita digitalizada.

Asimismo, se dijo que tales elementos podrían recabarse a través de la aplicación móvil que pondría el INE a disposición de los PPN y que, además, los PPN debían

incluir en la manifestación formal de afiliación, ratificación o refrendo, los requisitos que su normativa interna estableciera.

A fin de recabar los elementos mínimos citados, la aplicación móvil generará un expediente electrónico, el cual contendrá las imágenes siguientes:

- a) Anverso de la Credencial para Votar original;***
- b) Reverso de la Credencial para Votar original;***
- c) Fotografía viva de la o el ciudadano; y***
- d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.***

*En el entendido que los datos relativos al nombre completo, clave de elector y domicilio de la o el ciudadano que manifiesta su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, serán extraídos del padrón electoral, a partir de la captura del anverso y el reverso del original de la Credencial para Votar que emite este Instituto a la ciudadanía, **mientras que la fotografía viva y la manifestación de voluntad de afiliación, ratificación o refrendo con firma manuscrita digitalizada, será obtenidas directamente por la o el auxiliar, al momento de solicitar a la persona interesada la afiliación, ratificación o refrendo de su militancia.***

*Cabe señalar que **la fotografía viva de la persona es un mecanismo para la protección de la identidad de la o el ciudadano, a efecto de que ninguna otra persona pueda presentar el original de su Credencial para Votar emitida por el INE con la finalidad de afiliarla a un PPN sin su consentimiento o conocimiento. Es decir, al contar con la fotografía viva de la persona, el INE cuenta con elementos que le permiten tener certeza de que la persona que está presentando el original de su Credencial para Votar expedida por este Instituto a la o el auxiliar del PPN, efectivamente es la persona a quien esta autoridad le expidió esa credencial, que se encuentra presente en ese momento y que está manifestando a través de su firma manuscrita digitalizada, su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar de manera libre e individual su militancia.***

*Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, en su sesión de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, al resolver los expedientes SUP-JDC-5/2019 y acumulado, en los que se impugnó el similar INE/CG1478/2018, por el que este Consejo General el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho expidió el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin; señaló que la toma de la fotografía viva mediante la aplicación móvil, no constituye un requisito adicional, **sino un mecanismo de seguridad y certeza de las afiliaciones, además de que la medida resulta conforme con el bloque de***

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

constitucionalidad, así como con el marco legal que rige para el ejercicio del derecho de asociación en relación con el derecho de la protección de datos personales.

...”
[Énfasis añadido]

Bajo el contexto expuesto, resulta claro que esa forma alterna de afiliar a Josefa Mendoza Castellano, Idelfonsa Manzanero Estrella y Sonia Yvonne Gamarra Castro, utilizada por MC, resulta válida para demostrar el consentimiento de las personas quejasas citadas de militar en dicho Instituto Político, por lo cual debe otorgársele eficacia demostrativa, ya que no se encuentra contradicho ni demeritado en su valor probatorio por medio de prueba alguno.

Por otro lado, no pasa inadvertido para esta autoridad nacional la discrepancia que existe en las fechas contenidas en los formatos afiliación proporcionadas por MC y las fechas informadas por la DEPPP, conforme a lo siguiente:

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación DEPPP	Fecha de afiliación MC
2	Darvelio Carmona Gallardo	16/04/2012	04/04/2012
3	Iveth Margarita Cabrera Aguilar	12/03/2012	03/03/2012
4	Carla Milipsa García Ariza	16/04/2012	10/04/2012

No obstante, como puede advertirse, la diferencia en las fechas de afiliación de, Darvelio Carmona Gallardo, Iveth Margarita Cabrera Aguilar y Carla Milipsa García Ariza, no incide en su licitud, ya que la voluntad de dichas personas quejasas de militar en las filas del denunciado consta de manera anterior en las cédulas de afiliación aportadas por MC, lo que, en todo caso, sugiere que lícitamente fueron afiliados antes de que el partido las registrara formalmente ante la autoridad nacional. En efecto, dicha inconsistencia no anula la voluntad de las personas quejasas porque no incide en uno de sus elementos esenciales como es el consentimiento, sino que en todo caso se debe a una aspecto formal (fecha) y a la falta oportuna de MC de dar de alta a dichas personas en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos operado por el INE.

➤ **Afiliación ilegal.**

Respecto a la afiliación de Antonio Nájera Chale, es importante señalar que, aun cuando el partido denunciado aportó a la controversia la cédula de afiliación respectiva, dicha documental privada no es idónea para demostrar la licitud de la afiliación cuestionada, puesto que —como antes quedó dicho—, acorde con su contenido, el consentimiento del quejoso se otorgó el **ocho de mayo de dos mil trece**; sin embargo, acorde a lo señalado por la *DEPPP* y el propio partido político, este dio de alta al inconforme como su militante, desde el **ocho de abril de dos mil trece**, es decir, cuando todavía no contaba con el consentimiento correspondiente.

En efecto, de la simple observación de la cédula que fue aportada por *MC*, se destaca que la fecha de afiliación contenida en la cédula cuestionada **es posterior a la fecha proporcionada por la DEPPP, con un mes de diferencia**, lo cual genera certeza en este Consejo General, respecto a que, al momento en que el partido denunciado dio de alta al quejoso como su militante, no contaba con el consentimiento necesario, garantizado por el derecho constitucional de afiliación a los partidos políticos, en los términos que fueron referidos en el presente instrumento, al analizar el marco normativo atinente al derecho fundamental citado.

Lo anterior se resume en el cuadro siguiente:

Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i> y <i>MC</i>	Fecha de la cédula
Antonio Nájera Chalé	Ocho de abril de 2013	Ocho de mayo de 2013

Del modo anterior, esta autoridad electoral nacional arriba a la convicción de que *MC* incorporó al quejoso a su padrón de afiliados, sin que éste lo hubiese consentido, cuestión que no resulta sólo un aspecto formal, sino que resulta de la mayor importancia, pues permite a la autoridad y a la propia ciudadanía conocer con precisión la fecha en que, con arreglo al orden jurídico nacional, un ciudadano determinado pudo ser válidamente reconocido como militante de un partido político.

Del modo señalado, este Consejo General arriba a la conclusión de que, cuando *MC* incorporó a Antonio Nájera Chale a su lista de afiliados, **no contaba con el**

consentimiento necesario, por lo que, en el caso que nos ocupa, se considera que la infracción denunciada resulta existente.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado y el grado de participación fue como autor material del hecho ilícito con pleno dominio del hecho.	La conducta cuestionada fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las personas quejas, por parte del MC.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIFE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

En el presente asunto, las disposiciones vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el MC incluyó indebidamente en su padrón de afiliados al C. Antonio Nájera Chalé, sin demostrar que obtuvo su consentimiento para incorporarlo, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley de Partidos.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el respeto de la prerrogativa señalada, a través de mecanismos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados.

Por otra parte, como se analizó, el denunciado utilizó los datos personales de las personas quejasas como lo son, el nombre y la clave de elector, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, circunstancias que deben considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *MC*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La conducta infractora **fue singular**, pues aun cuando se acreditó que *MC* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, incluyendo su normativa estatutaria, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de las personas quejasas, tal circunstancia no implica *per se* un concierto o pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación por parte del instituto político denunciado, quien, como ya se dijo, incluyó en su padrón de militantes a las personas quejasas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción de la conducta infractora debe valorarse las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

a) **Modo.** En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuida al *MC*, consistió en incluir en su padrón de afiliados al C. Antonio Nájera Chalé, sin haber recabado su voluntad para pertenecer a las filas del instituto político citado, inobservando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) de la *Ley de Partidos*.

b) **Lugar y Tiempo.** En el caso concreto, las afiliaciones controvertidas sucedieron en las fecha y lugar que se cita a continuación:

Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
Antonio Nájera Chalé	8 de abril de 2013	Estado de México

Como puede advertirse de la tabla que antecede, la afiliación de Antonio Nájera Chalé aconteció con anterioridad a la aprobación del Acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad preponderante, consistía en asegurar la precisión y confiabilidad de los padrones de militantes de los partidos políticos de manera que, al no contar con la documentación soporte que demostrará la voluntad de la persona afiliada, los Partidos Políticos Nacionales debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante y, de no conseguirlo en los plazos marcados, proceder a dar de baja a los militantes respecto de quienes no contaran con la manifestación de voluntad respectiva, sin que, contrariamente a lo afirmado por el *MC*, la baja de los quejosos haya ocurrido de esta manera, ya que el denunciado desafiló al quejoso el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, es decir, diez meses después de la fecha señalada en el citado Acuerdo.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Este Consejo General considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

- *MC* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- *MC* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente

no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *Ley de Partidos*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Aunado a lo anterior, la conducta del MC resulta dolosa porque:

- El quejoso negó haber consentido su registro o incorporación como militante del MC; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.

- Quedó acreditado que Antonio Nájera Chalé se encontraba inscrito en el padrón de militantes *MC*, conforme a lo informado por el denunciado y la *DEPPP*.
- El partido político denunciado no aportó medio de prueba alguna para demostrar que la afiliación cuestionada se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, de manera que estuviera sustentada en la expresión libre y voluntaria del quejoso.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por *MC* se cometió al afiliar indebidamente a Antonio Nájera Chalé, sin demostrar su acto volitivo para ingresar en su padrón de militantes, así como para proporcionar sus datos personales con ese fin.

Lo anterior, independientemente que a la fecha de la resolución que nos ocupa, las personas quejosas, ya no formen parte del padrón de militantes del denunciado, pues la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las personas denunciadas citadas, otorgaron o no su consentimiento expreso para ser afiliadas, de modo que la fecha en que hayan sido dadas de baja resulta irrelevante para anular la infracción cuestionada o exculpar al *MC* de la responsabilidad por los hechos que nos ocupan, pues la infracción se actualizó en el momento mismo en que el denunciado las afilió indebidamente y continuó hasta que la dio de baja, lapso en el que el denunciado actuó ilícitamente.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

➤ **Afiliaciones sin reincidencia**

En el caso, **no existe reincidencia**, puesto que, de conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIFE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En efecto, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado la identificada con la clave INE/CG345/2017, emitida por este Consejo General el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete y confirmada por la *Sala Superior* al resolver el expediente SUP-RAP-602/2017, el cinco de octubre del mismo año, determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que la afiliación de Antonio Nájera Chalé aconteció con anterioridad al dictado de la resolución referida, esto es, el ocho de abril de dos mil trece, se estima que **no existe reincidencia**.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

En efecto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Bajo este contexto, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de Antonio Nájera Chalé a *MC*, pues se comprobó que éste lo afilió sin demostrar que medió su voluntad para pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas estriba en garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, con la correlativa obligación de cada partido político, de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación del quejoso, se dispuso indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *MC*.
- No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.

- No existe reincidencia por parte del *MC* respecto de la afiliación de Antonio Nájera Chalé.

Así, en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el *MC* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el denunciado infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejasas, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que han quedado acreditadas la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es necesario aplicar una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras cuestiones**, la gravedad de la conducta; la necesidad de *suprimir* prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Desde esta óptica, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) está compelido a ponderar, **casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que** converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserto en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y, consecuentemente, no administrar una justicia **completa**, contrario a lo previsto por la Norma Fundamental.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Lo anterior es relevante porque, si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en reiteradas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, como el que ha quedado demostrado a cargo del *MC*, se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LG/PE*, consistente en **una multa** por cada una de las personas en cuyo agravio se cometió la infracción.

En efecto, es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General **INE/CG33/2019**”, tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *MC*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desea o no militar en una fuerza política,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en acatamiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto de acuerdo TERCERO, se ordenó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de los ciudadanos hoy quejosos de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las actividades ordenadas a los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

En este contexto, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

*los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*¹⁰⁸, mediante el cual, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, informó al *Consejo General* que **los siete partidos políticos, -entre ellos el MC- durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo INE/CG33/2019.**

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de Antonio Nájera Chalé estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- Que se concluyó la existencia del dolo
- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar el padrón de sus militantes eliminando del mismo a las personas respecto de las cuales no contara con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante.
- Que Antonio Nájera Chalé fue dado de baja del padrón de militantes el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a que fenecieron los efectos del Acuerdo INE/CG33/2019.

Por ello, con base en los razonamientos vertidos en apartados anteriores, esta autoridad considera adecuado imponer, por la afiliación indebida de Antonio Nájera Chalé, **una multa de 963 días de salario mínimo vigente al momento de la afiliación indebida, expresado en su equivalente en UMA's** (Unidades de Medida y actualización) vigente al momento de emitir la presente resolución.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**¹⁰⁹

Cabe precisar que iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021,

¹⁰⁸ Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

¹⁰⁹ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#TEXTO%2010/2018>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**, además de las resoluciones dictadas bajo los acuerdos **INE/CG168/2021 e INE/CG1675/2021**.

Así, a juicio de este Consejo General, por las razones hasta aquí expuestas, se considera que la multa impuesta a MC, constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sobre todo como en el caso que nos ocupa, aquellas relacionadas con nuevos registros de militantes, que no cuenten con el respaldo que acredite la libre afiliación de las y los ciudadanos que figuran en el padrón de afiliados de un partido político

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

Afiliación indebida	DSMV de multa	Fecha de afiliación	Valor diario del SMV en 2013	Valor diario de la UMA 2022 ¹¹⁰	Equivalente en UMA's	Sanción por imponer
Antonio Nájera Chalé	963	8/04/2013	\$64.76 ¹¹¹	96.22	648.14	\$62,363.88

Para llegar a la conclusión anterior, es preciso multiplicar el quantum de la multa que se considera proporcional imponer (963 días de salario mínimo vigente al 8 de abril de 2013), por el valor del salario mínimo al momento en que se cometió la infracción, es decir \$64.76 (sesenta y cuatro pesos, 76/100 M.N.), de lo que se obtén una multa equivalente a \$62,363.88 (sesenta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos, 88/100 M.N.), redondeado al segundo decimal.

Inmediatamente después, a fin de acatar el criterio contenido en la jurisprudencia 10/2018 antes mencionada y obtener el monto de la sanción económica impuesta, expresado en UMA's, es necesario dividir el monto económico obtenido (\$62,363.88), entre el valor diario de la mencionada unidad, a la fecha en que se resuelve el presente asunto (\$ 96.22), de lo que resulta como multa a imponer, la cantidad de 648.14 UMA's.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al MC constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el

110 Conforme a lo publicado en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

111 Conforme a lo publicado por la Comisión Nacional de salarios Mínimos en su página de interne oficial https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104990/Tabla_de_salarios_minimos_vigentes_a_partir_de_01_enero_2013.pdf

futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que aun cuando la infracción cometida por el *MC* causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no reportó un beneficio o lucro para el infractor, o en daño o perjuicio económico causado a las personas quejasas, de manera que no es pertinente realizar una cuantificación de la incidencia monetaria que pudo haber tenido el ilícito cuyo estudio nos ocupa.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *MC* le corresponde para el mes de noviembre de este año, por concepto de ministración mensual para actividades ordinarias y permanentes, la cantidad de \$45,176,880.00 (cuarenta y cinco millones, ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta pesos, 00/100 MN).

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

A consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, por la totalidad de las personas denunciantes, el porcentaje de 0.13 % (cepo punto trece por ciento) de sus ministraciones correspondientes al mes de noviembre de la presente anualidad.

Por consiguiente, la sanción impuesta a *MC* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por *MC* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹¹² es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGPE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba **MC**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. NO SE ACREDITÓ la infracción denunciada consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales de Isabel Guadalupe Breceda Gómez, Josefa Mendoza Castellano, María Eugenia Jiménez Hernández, Paola Merino Sánchez,

¹¹² Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

Idelfonsa Manzanero Estrella, Iveth Margarita Cabrera Aguilar, Darvelio Carmona Gallardo, Rebeca Rodríguez Guillermo, Enrique de Jesús Hernández Peña, Sonia Yvonne Gamarra Castro, Claudia Bustamante Marcial, José Manuel Bustamante Marcial y Carla Milipsa García Ariza, por el Partido Movimiento Ciudadano, en términos de lo razonado en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

SEGUNDO. SE ACREDITÓ la infracción denunciada consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales de Antonio Nájera Chalé, por el Partido Movimiento Ciudadano, en términos de lo razonado en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

TERCERO. Se impone a Movimiento Ciudadano una multa, en los términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, por la infracción cometida en contra de Antonio Nájera Chalé, conforme a la tabla siguiente:

Nº	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA	Sanción por imponer
1	Antonio Nájera Chalé	648.14	8 de abril de 2013	\$96.22	\$62,363.88

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a Movimiento Ciudadano deberá ser deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que, por concepto de actividades ordinarias permanentes, reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 42 de la *Ley de Medios*; así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo establecido en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a las personas quejasas en el presente asunto; a Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante ante este Consejo General de este Instituto, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral**; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/IGBG/JD13/JAL/155/2020

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**